



Exp.: A/OBR-037571/2023

ACTUACIÓN: “Obras de urbanización del entorno del tramo norte de la tapia y muralla del recinto amurallado”

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026.

ASUNTO: Tramitación urgente. Procedimiento abierto simplificado. Pluralidad de criterios.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 241.978,04 euros (IVA incluido).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 199.981,85 euros.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL TRAMO NORTE DE LA TAPIA Y MURALLA DEL RECINTO AMURALLADO EN TALAMANCA DE JARAMA

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

“4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.*

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 159.1 LCSP:

“1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 de euros en el caso de contratos de obras, ...
- b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

En el caso de la contratación que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos, ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni prórrogas, asciende a **199.981,85 euros**, es por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros, y además, no se prevé ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor, por lo que procede la contratación siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

Al objeto de promover la libre concurrencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública, cualquier empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores conforme al art. 156 LCSP.

Conforme al supuesto establecido en el art. 131 LCSP, utilizaremos la pluralidad de criterios de adjudicación, basados en el principio de mejor relación calidad precio, utilizando criterios objetivos exclusivamente.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los artículos 145 y 146.2 LCSP, los criterios elegidos para la adjudicación, que permiten una mejora en las condiciones para la Administración, son los siguientes:

1. Criterio relacionado con los costes: el precio. Ponderación: 70%.

La fórmula elegida para valorar el precio ofertado pone en relación cada oferta con las restantes, otorgándose 70 puntos a la oferta más baja, y asignando la puntuación al resto de ofertas proporcionalmente, según la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación: } 70 \times \frac{\text{Importe de licitación} - \text{Oferta a valorar}}{\text{Importe de licitación} - \text{Oferta más baja}}$$

2. Ampliación del plazo de garantía (máx. 30 puntos)

Por cada 2 meses de ampliación del plazo de garantía, adicionales al plazo mínimo de 1 año, se otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos.

Por 2 meses adicionales	10 puntos
Por 4 meses adicionales	20 puntos
Por 6 meses adicionales	30 puntos

Total criterios adjudicación: 100 puntos

La ampliación del período de tiempo en que las mencionadas obras estén cubiertas por la garantía garantiza una mayor calidad en la obra a contratar, al responder ésta de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato, según establece el art. 110 de la LCSP. La ampliación máxima que se contempla, de 6 meses, se considera adecuada y proporcional al objeto del contrato.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, el señalado con el número 1, ya que dicho criterio es el único que se considera relevante para determinar la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto. Para apreciar dicha circunstancia se estará a lo dispuesto en el art. 149 LCSP y en el art. 85 del Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 21 de octubre de 2019.

2. CLASIFICACIÓN. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 a) LCSP todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá

lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

2.1 CLASIFICACIÓN

No se exige clasificación de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (artículo 77.1.a) LCSP). No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.1.a) LCSP: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato”.

Clasificación alternativa del contratista: Grupo K, Subgrupo 7 Categoría 2

2.2 SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL

Atendiendo a las características y al valor estimado del contrato, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, deberá acreditarse conforme a lo previsto en los artículos 87 y 88 LCSP, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse conforme a lo que dispone el artículo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditación, quedando así fijada la solvencia con precisión, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin que produzca efectos de carácter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados para la ejecución del mismo.

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y que se justifican en la presente memoria, o mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo y subgrupo de clasificación correspondiente al contrato.

A continuación, se exponen los criterios de solvencia que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato.

2.2.1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera

Medio:

Se ha optado por establecer el criterio señalado en el artículo 87.1 a) LCSP, en el que se regula la acreditación por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.

Criterio de selección:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, debe alcanzar el importe de 299.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 199.981,85 euros, el importe mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 299.972,77 euros.

Acreditación documental:

Mediante declaración responsable del empresario indicando el volumen de negocios de la empresa.

2.2.2.- Acreditación de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditación de la solvencia técnica que se considera más adecuado, dadas las características del contrato, es el previsto en el artículo 88.1 a) LCSP, si bien se contempla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.2 LCSP, un medio distinto para las empresas de nueva creación.

a) Empresas con antigüedad igual o superior a 5 años:

Medio:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los últimos diez años. Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

Criterio de selección:

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado en el año de mayor ejecución de los últimos 5 años en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, será igual o superior a 140.000,00 euros.

Acreditación documental:

Relación firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras. Los trabajos incluidos en dicha relación se acreditarán:

- Mediante certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público.
- Mediante un certificado expedido por el empresario destinatario de la obra o, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable del empresario, acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación cuando el destinatario sea un sujeto privado.

b) Empresas con antigüedad inferior a 5 años:

Medio:

Los medios de acreditación de la solvencia técnica que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato, son los previstos en el artículo 88.1 b) y c) LCSP (acumulativos).

Artículo 88.1 LCSP, apartado b): Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras acompañadas de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Criterio de selección:

Se deberá acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un responsable de las obras con titulación mínima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o titulaciones asimilables, con una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión y dos peones especializados.

Acreditación documental:

Declaración responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de este personal.

Para el personal responsable de la obra, la experiencia mínima de tres años se acreditará mediante una declaración responsable del trabajador de su participación en obras similares al objeto del contrato en los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), en la que se especifiquen los años y lugar de ejecución de las obras.

Artículo 88. 1 LCSP, apartado c): Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

Criterio de selección:

Se deberá acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos un responsable de las obras con titulación mínima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o titulaciones asimilables.

Acreditación documental:

Presentación acreditativa del título mínimo exigido, esto es, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico (o titulación asimilables).

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Con el fin de combatir el paro, se dispone como condición especial de ejecución que, al menos, uno de los puestos de trabajo entre el personal adscrito al contrato, esté ocupado por personal incluido en alguno de los siguientes supuestos:

- Ser desempleado
- Ser mujer
- Ser joven (menor de 30 años)

Forma de acreditación: Para su justificación el adjudicatario deberá presentar en el plazo de máximo de 15 días desde la formalización del contrato, la documentación del trabajador que justifique la condición de ser desempleado, el contrato celebrado con la empresa adjudicataria y justificación de la empresa de que se encuentra adscrito a la ejecución del contrato. Se acreditará el mantenimiento de la condición especial con periodicidad mensual durante toda la ejecución del contrato y un mes antes de la finalización de la ejecución del contrato, presentando relación firmada por el responsable de la empresa adjudicataria de los contratos que cumplen alguna de esas condiciones acompañando copia de los nuevos contratos que se hayan celebrado.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PLURIANUALIDAD DEL CONTRATO

En esta memoria se justifica la necesidad de comprometer anualidades futuras en relación con el contrato que se propone, incluida en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026.

El plazo de ejecución de las obras establecido en el Proyecto es de 4 meses. Teniendo en cuenta los plazos de tramitación para la licitación, se prevé el 1 de noviembre de 2024 como el del inicio de las obras, imputándose 1 mes de ejecución al ejercicio 2024 y tres meses de ejecución al ejercicio 2025.

Para la distribución del presupuesto, se ha tenido en cuenta el artículo 25.b) de la Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General de Presupuestos, relativa a la gestión presupuestaria para el año 2024, que establece que en la presupuestación de los contratos de obra habrá de tenerse en cuenta que el pago de la certificación de obra ejecutada en el mes de diciembre será abonado con cargo a los créditos no del ejercicio en que se realiza la obra, sino con cargo a los créditos del ejercicio presupuestario siguiente, de conformidad con el criterio de la Intervención General de la Comunidad de Madrid reflejado en su Informe de 25 de marzo de 2010. Por lo tanto, la anualidad de 2024 comprenderá un mes (noviembre) y la anualidad de 2025 comprenderá diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025.

Conforme a lo expuesto, en consonancia con el plan de desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto, la distribución del presupuesto del contrato en anualidades será la siguiente:

Desglose por año	Importe con IVA	Plazo
Año 2024	39.366,25 euros	1 mes
Año 2025	202.611,79 euros	3 meses

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el artículo 55.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES LABORALES SI EXISTIESEN

El presupuesto base de licitación se ha calculado en base al presupuesto de ejecución del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 233 d) LCSP, los proyectos de obra deberán comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado artículo e incluye un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto está ordenado por obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

El presupuesto del proyecto detalla, asimismo, el presupuesto de ejecución material, definido en el artículo 131 RGLCAP, como el resultado obtenido de la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de **168.051,97 euros**.

Asimismo, el presupuesto base de licitación, conforme a lo establecido en el artículo 100 LCSP y 131 RGLCAP, se obtiene incrementado el de ejecución material con los gastos generales de estructura que inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecución material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un importe de **21.846,76 euros**.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecución material un porcentaje del 6% en concepto de beneficio industrial, en este caso, **10.083,12 euros**.

Obtenemos así un presupuesto de **199.981,85 euros**, al que hay que aplicar el tipo impositivo vigente del 21%, del impuesto sobre el valor añadido, conforme a la Ley

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho tipo es del 21%, con un importe de IVA de **41.996,19 euros**.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitación, que conforme dispone el artículo 100 LCSP es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El presupuesto base licitación de este contrato son **241.978,04 euros**.

Según lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto de obra es el siguiente:

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1	URBANIZACIÓN Y ENTORNO MURALLA	151.829,52
2	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.825,08
3	SEGURIDAD Y SALUD	3.223,77
4	RETIRADAS	11.173,60
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	168.051,97
	13% Gastos Generales	21.846,76
	6% Beneficio Industrial	10.083,12
	Suma de G.G. y B.I.	31.929,87
	BASE IMPONIBLE	199.981,85
	21% IVA	41.996,19
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	241.978,04

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni tampoco su prórroga, de ahí que el valor estimado del contrato, definido en el artículo 101 LCSP para los contratos de obra como el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones, es de **199.981,85 euros**.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecución de la obra previsto en el proyecto que es de 4 meses, se prevé la ejecución de la misma en dos ejercicios presupuestarios, siendo la fecha de inicio prevista el 1 de noviembre de 2024.

Por último, el artículo 116.5 LCSP establece que: “si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Talamanca de

Jarama, contaba con una población en 2021 de 4.123 personas (2021 es el año que ha de considerarse para el cálculo de la población a los efectos de la cofinanciación del PIR 2022-2026). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificado por Decreto 211/2021, de 15 de septiembre, por los que se regula el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026, los municipios cuya población se encuentre comprendida entre los 2.500 y 5.000 habitantes aportarán, como cofinanciación al Programa, al menos el 1% sobre el importe de su asignación inicial que esté destinada a los gastos de inversión y a los asociados, correspondiendo a la Comunidad de Madrid la financiación del 99% restante.

El gasto se efectuará con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid, imputándose a la aplicación presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto 2023/001185.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

La finalidad del contrato es la entrega de una obra completa para el uso público. Los distintos apartados que conforman el proyecto de obras no pueden ser considerados como lotes independientes que pueden ser individualizados, dada la íntima y directa conexión que presentan unas tareas con respecto de las otras desde el punto de vista técnico.

La ejecución del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de forma óptima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección Facultativa, cuestión que podría verse imposibilitada si su ejecución se encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecución del contrato. Diariamente, durante la ejecución de la obra surgen incidencias o se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de carácter inmediato por parte del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista económico, para adoptar la más adecuada, de conformidad con el criterio de la Dirección Facultativa a la que, obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, pudiendo

dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecución de la obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe añadirse a lo anterior, la conveniencia de una única respuesta a la entrega al uso público, así como a la subsanación de los defectos observados que puedan deberse a deficiencias en la ejecución de la obra durante el plazo de garantía establecido, sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolución podrían alargarse en el tiempo, con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalación y, en definitiva, para sus posibles usuarios.

7. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de seguro de todo riesgo de construcción para hacer frente a todos los daños que se puedan producir de manera accidental o imprevisible durante la ejecución de la obra. y un seguro de responsabilidad civil incluida la Responsabilidad Civil Profesional, para hacer frente a los daños que se puedan ocasionar a terceros en el desarrollo de la actividad de construcción, es decir, a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato de obra. Ambos estarán vigentes desde la firma del contrato de obra hasta la finalización del periodo de garantía.

Si bien el adjudicatario debe constituir una garantía definitiva en favor de la Administración, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 LCSP, los siguientes conceptos:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.
- b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
- d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
- e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o


suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de todo riesgo de construcción y el del seguro de responsabilidad civil incluida la Responsabilidad Civil Profesional, para hacer frente a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato., son otros, como se ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dichas responsabilidades coadyuva a la mejor satisfacción del interés de la Administración en la ejecución del contrato y en la protección de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuación del contratista en la realización de la obra. Por estas razones, se considera apropiado exigir al contratista que celebre los contratos mencionados.

En Madrid, el día de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: JOSE TORTOSA DE LA IGLESIA - 
Fecha: 2024.07.30 19:58